

EL SALVADOR SE MUEVE

En nuestro número anterior (ECA, Julio-Agosto, 1973, pp. 527-544), reproducíamos el Mensaje del Señor Presidente de la República al cumplir el primer año de su mandato y la Declaración de los tres Partidos de oposición, que en la anterior campaña electoral constituyeron la UNO. En el Discurso presidencial se presentan los logros obtenidos y se reconocen algunos fallos operativos; en la Declaración opositora se insiste en los males acrecentados del país y los logros son juzgados como cortinas de humo, cambios en lo accidental para evitar cambios en lo fundamental.

No pretendemos discutir la objetividad de cada una de las apreciaciones. Ambas pertenecen a un determinado género literario, que obliga a una hermenéutica ponderada. Lo que nos importa de ambos documentos, y por ello los citamos aquí, es algo que les es fundamentalmente común: la grave situación del país. La UNO insiste en ello y juzga que las medidas gubernamentales para transformarla no son significativas e incluso no preñan nada bueno ni en lo económico ni en lo social ni en lo político. El Señor Presidente también acepta la gravedad de la situación, pero piensa que las medidas tomadas, todavía no suficientes para resolver el problema, son la preparación de otras más radicales que pondrán al país en el debido proceso de cambio.

Desde el primero de Julio, fecha del mensaje presidencial hasta mediados de Septiembre han aparecido hechos nuevos, que pudieran dar razón a la posición presidencial y que pudieran permitir hablar de un proceso uniformemente acelerado. Estos hechos son el establecimiento de la Junta Monetaria, las negociaciones con Honduras y la conciencia institucionalmente agudizada de la Reforma Agraria.

Sobre el significado de la Junta Monetaria se habla en este mismo número de la Revista. Baste aquí con subrayar la 'potencialidad' de esta medida. Potencialmente es medida de grande alcance tanto por lo que implica de quitar instrumentos de aprovechamiento propio y de presión a las minorías dominantes, como por lo que puede suponer

de instrumento indispensable en la financiación de la Reforma Agraria. Potencialmente decimos. Nada significaría, y lo mismo cabe decir del Banco de Fomento Agropecuario, la creación de la Junta Monetaria, si no se convierte efectivamente en lo que debe ser. Y hace falta verlo pronto. La historia de los pueblos no se mide por días ni se mide por años; pero tampoco pueden considerarse como pasos firmes los pasos lentos en una situación que se mueve vertiginosamente.

Sobre el significado de las negociaciones con Honduras habrá que esperar todavía. No conocemos el resultado de las pláticas que en estos días se están teniendo en México por altas delegaciones de los dos países. Pero el intento es serio y las esperanzas buenas. En caso de un resultado satisfactorio el avance sería considerable. A corto plazo y de primeras los más favorecidos serían los intereses capitalistas, que verían de nuevo facilitados sus mercados; a largo plazo se posibilitaría un mayor bienestar del pueblo y, más a fondo, un avance en la constitución de un pueblo centroamericano unido, como condición indispensable para la liberación y la independencia de Centroamérica.

Finalmente la aceleración previa del proceso de Reforma Agraria. Reconocida la trascendental importancia de las otras dos medidas, es, sin embargo, ésta última la verdaderamente trascendental, la que nos puede dar la clave para medir la verdad y la fuerza del impulso transformador del actual Gobierno. No han sido muy explícitas las declaraciones oficiales sobre este tema, pero el Seminario Nacional de Reforma Agraria para oficiales de la Fuerza Armada (27 de Agosto - 1º de Septiembre) ha resultado para la opinión pública un aviso de que algo serio se está fraguando. No parece ser este Gobierno muy propenso a brillantes proclamas demagógicas ni a pasos apresurados; pero tal vez esto no signifique falta de decisión sino seriedad y radicalidad en los propósitos a larga distancia. Las impresiones son de que se ha enfrentado con seriedad y radicalidad el proceso de la Reforma Agraria.

Tomados a la par estos tres puntos trascendentales, sobre todo si son exactas nuestras impresiones sobre el último de ellos, cabe decir que El Salvador ha empezado a acelerar su marcha. Más aún que ha tomado otra vía. Ha dejado la vía del desarrollo neocapitalista y ha entrado en la vía de la transformación social. ¿A qué se debe esta novedad que no sería exagerado calificar de cualitativa?

El arranque está en la última campaña para la elección presidencial. Los resultados de la votación popular probaron masivamente que el pueblo de El Salvador necesita cambios radicales y que ha sentido y exigido esa necesidad. La necesidad objetiva venía de muy atrás, pero la necesidad subjetiva es mucho más reciente. La situación es tan grave y pesadamente injusta, la presión demográfica sobre unas fronteras que no pueden abrirse, la facilidad geográfica de convertir en una sola conciencia popular los atisbos dispersos de unas conciencias individuales y grupales cada vez más apretadas, el influjo de otros cursos históricos en Latinoamérica, y la génesis de una nueva 'inteligencia' en el país, a la que no es ajena la labor de nuestra Universidad... son factores de esta subjetivación y apropiación de las condiciones objetivas.

En el primer año de Gobierno, sin embargo, no pudo responderse adecuadamente a esta nueva situación. La ocupación militar de la Universidad de El Salvador pareció significar una concesión al capital y a los hombres del orden establecido; por otra parte, la decisión en favor del Cerrón Grande pareció una medida exclusivamente desarrollista. Pudo pensarse en un regreso a medidas de orden y desarrollo con menoscabo de las exigencias de mayor justicia. Sólo desde los años restantes del actual Gobierno podrá sopesarse el sentido último y exacto de esas dos medidas.

Pero en el intervalo de este primer año el Gobierno pareció solidificarse. Esta mayor solidez no debe atribuirse a que el capital haya cerrado filas en apoyo del nuevo Gobierno. Dada la actual conciencia histórica de El Salvador, el capital ya no es suficiente para dar solidez a un Gobierno, que se ponga a su servicio. Tampoco ha sido el pueblo quien le ha dado solidez, porque el pueblo está actualmente desprovisto de poder para poder contrarrestar por sí solo el influjo del poder económico. Quedan, por tanto, las Fuerzas Armadas como principio fundamental de esta mayor solidez; de hecho, puestos políticos fundamentales van siendo cubiertos por militares. El cuerpo militar a raíz de las elecciones pasadas y del subsiguiente golpe de Estado parece haber aumentado decisivamente en conciencia de la situación dramática del país y en conciencia de su obligación para con el cambio radical de esa situación dramática. Una nueva misión se abre ante sus ojos; y esta misión que es la de contribuir al cambio social, puede ser la gran tarea que purifique y enaltezca a las Fuerzas Armadas. Sería un nuevo concepto de su contribución a la salvaguarda de la seguridad del país.

La apelación política a los militares es un arma peligrosa. Introduce en el sistema un cuarto poder con capacidad manifiesta de subordinar a los otros tres. ¿Tiene garantías este cuarto poder, el poder de la fuerza militar, para dirigir la política del país? Hace pocos años la respuesta era contundentemente negativa; hoy no puede serlo sin ulteriores distinciones. Las fuerzas militares pueden intervenir en la marcha de un pueblo como lo están haciendo en el Brasil, pero también pueden intervenir como lo están haciendo en Perú. Una cosa parece clara: sólo con unas Fuerzas Armadas unidas y firmemente convencidas es posible un cambio radical en las actuales estructuras del país. Lo ideal sería que estas fuerzas redujeran su intervención al apoyo de un Gobierno, respaldado por la mayoría popular, que propiciase firmemente el cambio. Pero lo importante es el cambio, dada la actual estructura injusta. Y es a este cambio lo que debe subordinarse todo lo demás. La democracia es fundamentalmente un servicio a la mayoría del país y las formas democráticas deben acomodarse históricamente a las posibilidades reales de ese servicio. No siempre se adecúan convenientemente la moral social y el derecho positivo, ni menos aún las verdaderas necesidades de la sociedad con los modos operativos de las estructuras estatales. La esencia democrática está por encima de las apariencias democráticas, y esta esencia puede buscarse objetivamente y puede realizarse cuando la mayoría pueda actualizar y ejercitar sus derechos fundamentales.

No es aventurado afirmar que por los caminos ordinarios, por los caminos usuales va a ser muy difícil llegar a una sociedad medianamente justa. Y esto por una razón de mucho peso: porque el poder efectivo no está en manos de las mayorías necesitadas, el poder efectivo no está en manos del pueblo. Por eso hay mucho poder que no está dispuesto a que se realicen rápidamente los cambios necesarios. En estas circunstancias se necesita quien favorezca y apoye esas exigencias objetivas de la mayoría, quien contradiga las pretensiones de quienes hacen fuerza desde su poder económico. Esto sólo lo pueden hacer eficazmente las fuerzas militares, mientras dure esa situación. Son ellas las que tienen que apoyar a un Gobierno que esté decidido a moverse contra la corriente de los intereses que no son los intereses justos de la mayoría.

No es tampoco aventurado asegurar que hasta ahora las fuerzas militares han respaldado con frecuencia, tras la apariencia de un orden constitucional, a los grandes intereses del capital. Lo único que ahora se propone es que cambien el signo de su

servicio y respalden vigorosamente a las mayorías populares y a los cambios que esas mayorías necesitan. Las fuerzas militares serían entonces la fuerza de quienes teniendo derecho no tienen fuerza, el poder de los que siendo mayoría no tienen poder. Y esa sería la profunda justificación de su mayor influjo en la acción política. Sería también la única justificación. Y el éxito de su misión debiera medirse por los resultados obtenidos en una mayor participación del pueblo en los bienes de la nación, y en ir haciendo cada vez menos necesaria su participación —la de las fuerzas militares— en la gestión pública. Su participación no será decisiva y definitivamente justificada más que por el servicio que presten al cambio social. Lo cual implica que estén en contacto con el pueblo mismo.

Debe ser el pueblo el gestor de su propio destino y el impulsador de los cambios necesarios. Entendemos aquí por pueblo no una clase social sino la mayoría necesitada, forme o no una clase social, y los que se entregan directamente al servicio de esa mayoría. Mientras se busca la manera efectiva de la participación activa de las mayorías, difícilmente se ve otra forma de proceder que por medio de una minoría que las represente. Algún partido puede pensar, aun en su carácter minoritario, que es la verdadera representación de una clase social. Sea de esto lo que fuere, su planteamiento abre la posibilidad de que una minoría represente de momento a la mayoría. La condición indispensable para que esto no resulte una farsa elitista y dictatorial es el contacto permanente con la realidad popular. Si el pueblo de momento no puede ir al poder es necesario que el poder vaya al pueblo; si el pueblo no puede ser el gobernante es necesario que el gobernante sea popular.

Si la Fuerza Armada quiere desempeñar un papel decisivo, junto con otras fuerzas, en el cambio social, que sin ella no puede realizarse pero que ella sola tampoco lo puede realizar, es menester que se atenga a esas condiciones. Que con los hechos capte la confianza popular. Hay diversas maneras de hacerlo. Entre otras: honestidad absoluta en lo referente al dinero, lo cual permitirá además una gran libertad de acción; escrupuloso respeto en el trato con las masas populares; enfrentamiento decidido con quienes resisten al cambio social; estima positiva de la inteligencia tanto para la creación de modelos como para la crítica permanente... La prueba decisiva estará en lo que se vaya a hacer con la Reforma Agraria. Un decidido y lúcido compromiso con ella, es lo que va a permitir el cambio profundo no sólo de las estructuras fundamentales del país, sino al mismo tiempo de quienes dicen estar buscando el cambio social.

El desafío es trascendental. Puede que estemos entrando en un giro decisivo de la historia salvadoreña. El fracaso en el intento sería un gravísimo retroceso histórico; el éxito, que no podrá menos de ser difícil y doloroso, sería un salto definitivo, una nueva independencia. Tras ella una nueva época histórica. Nada menos que eso.



REQUIEM POR CHILE

El pasado 11 de septiembre, en un impresionante y prolongado despliegue militar que arrasó con cientos de vidas, el Ejército chileno derrocó al gobierno constitucional de elección popular que presidía el Dr. Salvador Allende. De creer los despachos de las agencias de noticias, éste se habría suicidado antes que rendirse a los militares golpistas. Hoy, una Junta militar, presidida por el General Augusto Pinochet, gobierna en Chile.

Es muy pronto, todavía, para poder calibrar el sesgo que los acontecimientos van a tomar en Chile, aunque es seguro que el capital internacional, en forma de "generosos" préstamos —sistemáticamente negados al gobierno del Dr. Allende—, no dejará escapar de nuevo de sus manos los privilegios que paulatinamente le iban siendo arrebatados en Chile. Tampoco es claro si las Fuerzas Armadas chilenas no le sacarán sabor al ejercicio del poder y querrán conservar los puestos de gobierno que hoy han ganado, no por la fuerza del sufragio popular, sino por la fuerza de los aviones, los tanques y las ametralladoras.

Es también muy pronto para evaluar los logros y los fracasos del Gobierno del Dr. Allende, entre otras cosas porque el Golpe de Estado ha truncado su experimento en sus comienzos. Que había errores, es innegable, como innegable es que la situación económica de Chile era sumamente grave. Pero de eso no se siguen las consecuencias que tan precipitada como interesadamente quieren sacar ciertos comentaristas.

Sorprende además que quienes, todavía no hace mucho, criticaban un frustrado golpe de Estado en nuestro país, alegando que la ruptura de la constitucionalidad supone un tal descalabro, que bajo ningún supuesto se justifica, hoy alaben el "sentido democrático" del Ejército chileno golpista. Cabe preguntarse si, en el fondo, para dichos comentaristas lo importante es la Constitución y la democracia en cada país o más bien los intereses que tan paladinamente defienden.

El Golpe de Estado chileno tiene, en cualquier caso, una serie de consecuencias que conviene tener muy presentes, tanto para el mismo Chile como para el resto de pueblos latinoamericanos.

En primer lugar, la ruptura de la constitucionalidad democrática en Chile, donde su preservación era tenida como timbre de gloria y garantía de las paulatinas conquistas populares, hace retroceder deplorablemente la situación política de ese país y lanza por la borda la institucionalización allí lograda de fundamentales derechos políticos y sociales. "Al calor de los muertos", los militares en el poder han llegado a proclamar de varias maneras su intención de barrer con el marxismo en Chile, lo que, mal que les pese, es una declaración que viola abiertamente la Constitución chilena, notablemente respetuosa en este sentido. La persecución desencadenada, los fusilamientos, las deportaciones e incluso el anuncio de una nueva Constitución (¿a la medida de qué intereses?) preludian ya un triste futuro a la democracia chilena.

Pero, más allá de lo que esta ruptura pueda significar para Chile, hay una consecuencia que amargamente empieza a imponerse a quienes se preocupan con honestidad por el futuro de los pueblos latinoamericanos. La formularemos en forma de pregunta: ¿Es posible transformar radicalmente las estructuras injustas de nuestros países conservando las tradicionales instituciones democrata-liberales? ¿Es posible emprender cambios a fondo en beneficio del pueblo oprimido sin que se resquebrajen legislaciones hechas y pensadas en muchos casos para beneficio exclusivo de las "élites" opresoras? Formulado de otra manera: ¿pueden las instituciones actuales de nuestros países propiciar un estado de justicia real? La pregunta es grave y denotaría mucha irresponsabilidad resolverla con un fácil sí o no. Porque en juego está la concordancia entre nuestros ideales y nuestro quehacer humano, entre nuestras formas de convivencia y la viabilidad de la justicia para todos los hombres de nuestros pueblos.

Un segundo punto al que lo sucedido en Chile nos llama a reflexión es el de la apoliticidad de las Fuerzas Armadas. Es un hecho que en prácticamente todos los países latinoamericanos el Ejército se encuentra, por Constitución, al margen de la política partidista. Sin embargo, es también un hecho, y no poco notorio, que en la mayor parte de nuestros países los gobiernos son solapada o abiertamente militares. Más aún, los últimos tiempos muestran una seria tendencia a la militarización del ejercicio del poder. Dos ejemplos de ello, bien distintos por cierto, son Perú y Brasil. Los casos de Bolivia y Uruguay, demasiado parecidos en su significación ideológica, manifiestan con evidencia notoria que la apoliticidad de las Fuerzas Armadas latinoamericanas no es sino un mito más de entre la abundante mitología de la ideología liberal.

Los sucesos de Chile son a este respecto extremadamente significativos, puesto que el Ejército chileno era considerado como un modelo de profesionalismo apolítico, respetuoso y fiel a su deber de respaldar al Gobierno de turno popularmente elegido. Hay que cuestionarse, entonces, si la apoliticidad de las Fuerzas Armadas no es, en el fondo, una forma de connivencia con un determinado tipo de régimen y, por ende, respaldo y seguridad, no de la voluntad de los pueblos —como lo exigen las diversas Constituciones latinoamericanas—, sino de unos determinados intereses, es decir los de las élites secularmente en el poder. Dicho de otra manera: ¿en qué medida los Ejércitos latinoamericanos pueden permitir la voluntad de liberación popular? ¿Pueden las Fuerzas Armadas garantizar el respeto a las conquistas del pueblo de la misma manera que han garantizado secularmente los privilegios de los poderosos? Estamos seguros de que esta respuesta no es tampoco unívoca. Pero sería justo que quienes, con ideales y honradez nacionalista, sirven en las Fuerzas Armadas de nuestros países se examinen sobre estas interrogantes estructurales, a la luz de las enseñanzas de la historia latinoamericana.

Y una de las enseñanzas más duras de la crisis chilena se centra en el papel jugado allá por la Democracia Cristiana y en las posibilidades que, de cara a un futuro latinoamericano, puede o no abrir la ideología política que sustenta ese partido. No es del caso analizar las muchas disensiones internas que aquejan a la DC en Chile ni las posibles justificaciones que sobre su actuación concreta puedan exponerse. Los hechos desbordan siempre toda posible interpretación. Y los hechos históricos, en este caso, nos hablan de una demasiado prolongada unión de posturas entre la DC y el sector más derechista del abanico partidista chileno, de un apoyo sistemáticamente opositor a las posturas del Gobierno del Dr. Allende, y de un lastimoso y preponderante papel en la crisis que ha dado al traste con este gobierno. A través de su proceder negativista, la DC chilena ha estado coqueteando estos últimos años con la seducción de la infidelidad golpista, seducción en la que, si no directa, sí indirectamente ha caído en el presente golpe. Es deplorable que quienes desde hace años han mantenido la tesis de la “revolución en la libertad”, no sólo se hayan convertido en opositores de un esfuerzo indudablemente revolucionario, sino que hayan llegado hasta condonar y entrar en connivencia con quienes sofocan la libertad. Cabe entonces preguntarse si el movimiento político de la DC es un movimiento capaz de responder a la historia actual de los pueblos latinoamericanos o si

no representa, más bien, una forma adoptada contemporáneamente por las élites tradicionales para mantener en lo fundamental la estructura de nuestros países. Dicho en otros términos: ¿es capaz la DC de propiciar una revolución radical? Lo sucedido en Chile y el sesgo que un poco por doquier va tomando la DC nos habla del fracaso histórico de sus ideales teóricos. No queremos ser agoreros, pero fácilmente se puede predecir que esta agrupación política irá paulatinamente escindiéndose en dos alas claramente diferenciadas, cada una de ellas apuntado a un lado de las opciones políticas.

Los sucesos de Chile, más que una condena del socialismo —que no era allí una realidad, sino un objetivo—, suponen la condena histórica de un sistema, incapaz de propiciar los cambios que el pueblo necesita. El General Pinochet lo ha dicho sin querer, al declarar que, “una vez que todo esté normalizado, el país podrá volver a su democracia tradicional”. ¿Significa esto que la democracia sólo sirve para tiempos de “normalidad”, es decir, tiempos en los que se vive la consagrada explotación de nuestros pueblos? Parece confirmar esta hipótesis la paulatina pero segura fascistización de no pocos gobiernos latinoamericanos, fascistización correspondiente a la progresiva conciencia política de los oprimidos. Si esto es así, no es por Chile por quien hay que entonar “requiem”, sino por nuestra pseudodemocracia: esa nuestra vieja “democracia”, larvada por instituciones liberaloides, espectadora y cómplice impasible de seculares injusticias, impotente e incapaz de responder a las demandas de los pueblos oprimidos que quieren acceder como sujetos libres a la historia.